



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA  
CIUDAD DE MÉXICO

JUICIO DE  
AMPARO  
P.1251/2018-  
VIII

OF.22475/2019	DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
OF.22476/2019	CONTRALORÍA INTERNA EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
<del>OF.22477/2019</del>	<del>ALCALDE DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)</del>
OF.22478/2019	DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (ANTES CONTRALORÍA GENERAL) (AUTORIDAD RESPONSABLE)
OF.22479/2019	SEGUNDA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE) (REFERENCIA: II-34204/2014)
OF.22480/2019	AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO (MINISTERIO PÚBLICO)

En los autos del juicio de amparo 1251/2018-VIII, promovido por [REDACTED] contra actos del Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y otras autoridades, se dictó sentencia que a la letra dice:

"En Ciudad de México, a las **DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL NUEVE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE**, día y hora señalados para la celebración de la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo número **1251/2018-VIII**, en audiencia pública el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Francisco Javier Rebolledo Peña, asistido por la Secretaria **Diana Laura Mireles Ramírez** que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes ni representante de ellas.

**Acto seguido**, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en autos, dando lectura de ellas, entre las que se encuentra la demanda de amparo, que dio origen al presente asunto, promovida por [REDACTED] por propio derecho, proveídos de cinco de noviembre de dos mil dieciocho y diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, en los que se admitió a trámite la demanda y su ampliación, informes justificados rendidos por las autoridades responsables, las pruebas, las constancias de notificación a las partes y proveídos que acordaron lo conducente.

**El Juez acuerda:** con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias de autos y por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables.

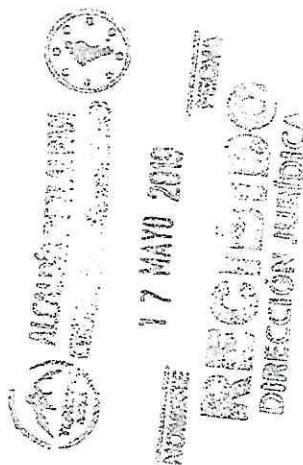
**En periodo probatorio:** la Secretaria da cuenta con las documentales, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones ofrecidas por las partes.

**El Juez acuerda:** con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten y desahogan por su propia y especial naturaleza las pruebas ofrecidas por las partes. No existiendo pruebas pendientes que desahogar se cierra el periodo probatorio.

**Periodo de alegatos**, abierto éste, la Secretaria **certifica:** que únicamente el quejoso hizo uso del derecho que le confiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, y que el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó el pedimento que a su representación social compete.

**El Juez acuerda:** con apoyo en lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por hechos los alegatos formulados por el quejoso, sin perjuicio de ser tomados en consideración al momento de resolver, y por hecha la certificación de cuenta

Sin existir pruebas, diligencias o pedimento alguno, pendientes por desahogar, se tienen por celebradas las presentes etapas de la audiencia constitucional en términos de esta acta y se procede a dictar la sentencia correspondiente.



Archivar



**Vistos;** para resolver los autos del juicio de amparo indirecto número **1251/2018-VIII**, promovido por [REDACTED] por propio derecho, contra actos del Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y otras autoridades; y,

**RESULTANDO.**

**PRIMERO.** Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el **treinta de octubre de dos mil dieciocho** (fojas 2 a 16), turnado a este Juzgado de Distrito en la materia y jurisdicción citados, el treinta y uno siguiente, **Luis Aburto Orozco**, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se indican:

**III.- AUTORIDADES RESPONSABLES.-**

**A) DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO [...].**

**B) CONTRALORÍA INTERNA EN TLALPAN [...].**

**C) JEFA DELEGACIONAL EN TLALPAN [...].**

**D) DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO [...].**

**IV.- ACTO RECLAMADO.-** De la autoridad mencionada en el **cabal cumplimiento** a la Resolución al Recurso de Apelación número 1374/2015 y 1543/2015 (ACUMULADOS) emitida por la Sala Superior del H. Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, correspondiente a la sesión plenaria del día Veintitrés de Septiembre del año Dos Mil Quince, relacionado en el Juicio de Nulidad II-34204/2014.

**SEGUNDO.** Por acuerdo de **cinco de noviembre de dos mil dieciocho** (fojas 17 a 21), se registró la demanda con el número **1251/2018-VIII**, se **admitió**, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se requirió a las autoridades responsables para que rindieran su informe justificado.

**TERCERO.** Por auto de catorce de enero de dos mil diecinueve (fojas 92 a 94), se dio vista a la quejosa para que manifestara si a su interés legal convenía **ampliar la demanda y señalar como acto reclamado** la omisión por parte de la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, de emitir pronunciamiento en torno a la cantidad que debe pagarse al aquí quejoso por concepto de los salarios que dejó de percibir, incluyendo las demás prestaciones a que tiene derecho, desde el momento en que fue separado de su cargo, hasta que se dé cumplimiento a la sentencia de nulidad, sin que hubiera realizado manifestación alguna, por lo que el diecinueve de febrero siguiente (fojas 102 a 104), se hizo efectivo el apercibimiento decretado, y se tuvo como autoridad responsable a la Segunda Sala citada y como acto reclamado la omisión de realizar todos los actos tendentes a determinar las cantidades que por concepto de salarios dejó de percibir el aquí quejoso, por lo que se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y se requirió a la autoridad responsable para que rindiera su informe justificado.

**CUARTO.** Seguida la secuela procesal, se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, inició al tenor del acta que antecede y termina con el dictado de la presente sentencia; y,

**CONSIDERANDO.**

**PRIMERO.** Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, es legalmente competente para conocer de este juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Federal; 35, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama una omisión a autoridades administrativas con residencia en la jurisdicción que corresponde a este órgano judicial.

**SEGUNDO.** Para efectos de determinar la certeza de los actos reclamados, con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo,





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA S-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

## JUICIO DE AMPARO

P.1251/2018-

VIII

se toma en consideración que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, aplicada por analogía, definió la obligación consistente en que el juez de amparo analice la demanda de garantías en su integridad a efecto de establecer con exactitud la intención del promovente y precisar los actos materia de la litis constitucional.

En la jurisprudencia mencionada se expresa:

**DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.** Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.

(Registro: 900169, Novena Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice 2000, Tomo I, página 207)

La jurisprudencia transcrita establece que la demanda de garantías es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito lo corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia.

También, debe destacarse que la precisión de los actos reclamados debe realizarse sin tomar en cuenta los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad.

Por lo anterior, del análisis integral que al efecto se realiza de la demanda y sus anexos, se colige que el acto reclamado consiste en:

- **De la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México:**
  - La omisión de realizar todos los actos tendentes a determinar las cantidades que por concepto de salarios dejó de percibir el aquí quejoso con el fin de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil catorce, en el juicio de nulidad II-34204/2014, modificada por la diversa sentencia dictada en el recurso de apelación 1374/2015 y 1543/2015 (ACUMULADOS), así como a la resolución de queja por incumplimiento de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.
- **Del Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios, de la Contralora Interna y Alcalde, ambos de la Alcaldía en Tlalpan y del Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General (antes Contraloría General), todos de la Ciudad de México:**
  - La omisión de cumplir con las sentencia de nulidad, de apelación y de queja citadas.

**TERCERO. No es cierto** el acto reclamado al **Contralor Interno**, a la **Alcaldesa**, ambos de la **Alcaldía en Tlalpan** y al **Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General** (antes Contraloría General), todos de la **Ciudad de México**, consistente en la omisión de cumplir con la sentencia de apelación y de queja citadas, toda vez que así lo manifestaron al rendir su informe justificado (fojas 34 a 35, 68 a 70 y 60 a 62, respectivamente), sin que el quejoso hubiera exhibido prueba en contrario tendente a desvirtuar tales negativas.

Lo anterior es así, toda vez que **por lo que respecta a la Alcaldesa en Tlalpan de la Ciudad de México**, de las copias certificadas relativas al juicio de nulidad II-34204/2014, que se encuentran agregadas en un legajo por separado, a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, no se advierte que se le hubiera vinculado al cumplimiento de las sentencias y resolución de queja citadas.

Ahora, por lo que respecta al **Contralor Interno en la alcaldía de Tlalpan** y al **Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General** (antes Contraloría General), ambos de la **Ciudad de México**, tal negativa se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio de nulidad II-34204/2014, que se encuentran agregadas en un legajo por separado, a las que previamente se les concedió valor probatorio pleno, de las que se advierte que en el ámbito de su competencia, dieron cumplimiento a las sentencias y resolución de queja de mérito, dado que con la copia certificada del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente CI/TLA/D/0444/2012, la **primera**, acreditó que **dejó sin efectos la**





resolución administrativa sancionadora de nueve de mayo de dos mil catorce, y la **segunda**, con la copia certificada del folio 283/14 de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, acreditó que **se canceló del registro de las sanciones impuestas al aquí quejoso, consistentes en inhabilitación por un año y destitución del puesto.**

En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, **se sobresee en el juicio** en relación con el acto y autoridad que quedaron precisados.

Sirven de apoyo a lo anterior las tesis y jurisprudencia cuyos rubros y contenidos son los siguientes:

**INFORME JUSTIFICADO NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.** *Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.*  
(Registro: 804176, Sexta Época, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación, Volumen XLIII, Primera Parte, página 181)

En atención a lo anterior, dado que se ha determinado el sobreseimiento respecto del acto reclamado al **Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México** (antes Contraloría General), no se estudiarán las causas de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XX y fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, de la Ley de Amparo.

**CUARTO.** Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables **Segunda Sala Ordinaria del hoy Tribunal de Justicia Administrativa** y al **Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios**, consistentes, respecto de la **primera**, en la omisión de realizar todos los actos tendentes a determinar las cantidades que por concepto de salarios dejó de percibir el aquí quejoso con el fin de lograr el cumplimiento de la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil catorce, en el juicio de nulidad II-34204/2014, modificada por la diversa sentencia dictada en el recurso de apelación 1374/2015 y 1543/2015 (ACUMULADOS), así como a la resolución de queja por incumplimiento de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, y respecto de la **segunda**, consistente en la omisión de cumplir con las sentencias referidas, toda vez que si bien al rendir su informe justificado lo negaron (fojas 112 a 113 y 46 a 54, respectivamente), de las copias certificadas que integran el citado juicio de nulidad, se desprende que efectivamente, las autoridades responsables han incurrido en las omisiones que se les imputan.

**QUINTO.** Para mejor comprensión del asunto, es oportuno citar los antecedentes que se obtienen de las copias certificadas relativas al juicio de nulidad II-34204/2014, que se encuentran agregadas en un legajo por separado (fojas 38 a 222), a las que previamente se les otorgó pleno valor probatorio, y de las que se advierte lo siguiente:

1. Mediante escrito recibido en la Oficialía de Partes del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México), el dos de junio de dos mil catorce, Luis Aburto Orozco, por propio derecho, interpuso juicio de nulidad en contra de la resolución de nueve de mayo de dos mil catorce, dictada por el Contralor Interno en la delegación Tlalpan del Distrito Federal (hoy Alcaldía en Tlalpan de la Ciudad de México), en el expediente CI/TLA/D//0444/2012, en la que se determinó su destitución del empleo, cargo o comisión que desempeñaba, así como la inhabilitación temporal por el término de un año.
2. De dicha acción correspondió conocer a la Segunda Sala del entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México), quien el tres de diciembre de dos mil catorce, dictó sentencia en la que declaró la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
3. Inconforme con la sentencia de nulidad, el actor, aquí quejoso, y el Contralor Interno en la delegación Tlalpan del Distrito Federal (hoy Alcaldía en Tlalpan de la Ciudad de México), interpusieron recurso de apelación, de los cuales correspondió conocer a la Sala Superior del Tribunal citado, quien los radicó con el número 1374/2015 y 1543/2015 (acumulados), y mediante sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil quince, resolvió:

[...]





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

En consecuencia, procede modificar el último párrafo de la sentencia apelada, que textualmente señala:

[...]

Para quedar de la siguiente forma:

JUICIO DE  
AMPARO

P.1251/2018-

VIII

Por lo tanto, de acuerdo con los criterios jurisprudenciales referidos, como ya se dejó asentado esta Sala procede al análisis de las pruebas ofrecidas por el actor, con las cuales se acredita fehacientemente, el día siete de junio del dos mil diez, en que se realizó el Alta de la camioneta tipo vagoneta, Línea Chevrolet Cargo van, modelo 2010 con placa número 886XCR, el enjuiciante no se encontraba laborando en el módulo de licencias y control vehicular de la Delegación Tlalpan, tal y como lo acredita con la Tarjeta de Control de Entrada y Salida código número A04007, que obra a foja sesenta y cuatro de los autos, donde se aprecia que su salida ese día fue a las quince horas con nueve minutos, y el Alta del citado vehículo se ejecutó el mismo siete de junio de dos mil diez a las diecisiete horas cincuenta y seis minutos nueve

segundos, tal y como se observa en el Historial de Movimientos de Vehículos Particulares de la placa número 886XCR de esa fecha, que consta a fojas trescientos veinticuatro del expediente en que se actúa, que dicho sea de paso que esa prueba fue ofrecida por la autoridad demandada, donde se precisa la fecha y hora ya referidas, de tal forma que con tales elementos de juicio resulta incuestionable que las irregularidades que se le atribuyen al actor no son ciertas y por ello se actualizan las hipótesis previstas en el artículo 127, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, por lo que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 128, fracción II, de la citada ley, procede declarar la nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, quedando obligada la autoridad demandada a dejar sin efecto legal alguno dicha resolución.

Asimismo, se le reinstale en el cargo de Operador (Revisor) del Módulo de licencias y Control Vehicular de la Delegación Tlalpan, en razón de que el puesto aludido es de base, como se desprende del catálogo de puesto de la referida delegación.

Como consecuencia de lo anterior, se le paguen los salarios que dejó de percibir, incluyendo las demás prestaciones a que tenga derecho, desde el momento en que fue separado de su cargo, hasta que se dé cumplimiento al presente fallo, así como la cancelación de la sanción aludida del Registro Público de Servidores Públicos.

Lo anterior en un término que no exceda de quince días contados a partir de que quede firme esta resolución.

[...]

4. Por acuerdo de treinta de junio de dos mil dieciséis, la Segunda Sala citada, declaró que la sentencia de treinta de junio de dos mil dieciséis,





- causó ejecutoria por ministerio de ley.
5. Mediante escrito presentado el cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el actor, aquí quejoso, interpuso queja por incumplimiento, del cual conoció la Segunda Sala citada, quien el veintiséis de noviembre siguiente, dictó resolución declarándola **fundada**.
  6. Mediante oficio presentado el doce de diciembre de dos mil dieciséis, la Contralora Interna en la delegación Tlalpan del Distrito Federal (hoy Alcaldía en Tlalpan de la Ciudad de México), remitió copia certificada del acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, dictado en el expediente CI/TLA/D/0444/2012, por el que **se dejó sin efectos la resolución administrativa sancionadora de nueve de mayo de dos mil catorce**.
  7. Por oficio presentado el veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, la Contralora Interna en la delegación Tlalpan del Distrito Federal (hoy Alcaldía en Tlalpan de la Ciudad de México), remitió copia certificada del folio 283/14 de veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por el que **se canceló del registro de las sanciones impuestas al aquí quejoso, consistentes en inhabilitación por un año y destitución del puesto**.
  8. Mediante acuerdos de veintisiete de febrero, veintiuno de agosto y ocho de septiembre de dos mil diecisiete, la Segunda Sala citada, **vinculó al cumplimiento de la sentencia de nulidad a la Directora General de Administración de la delegación Tlalpan (hoy Alcaldía en Tlalpan), al Secretario y al Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana**, ambos de la **Secretaría de Obras y Servicios**, todos de la **Ciudad de México**, y las requirió para que acreditaran haber reinstalado al aquí quejoso en el cargo que desempeñaba y realizaran el pago de los salarios que dejó de percibir desde el momento en que fue separado de su cargo y hasta que se dé cumplimiento a la sentencia de nulidad.
  9. Por oficio presentado el doce de marzo de dos mil dieciocho, el apoderado general de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, remitió copia certificada de la constancia de hechos de uno de marzo de dos mil dieciocho, **se reinstaló al aquí quejoso en la plaza 5605517, quedando adscrito a la Dirección de Transferencia y Disposición Final de los Residuos Sólidos de la agencia citada**.
  10. Mediante acuerdo de dos de abril de dos mil dieciocho, la Segunda Sala citada, declaró que la sentencia de nulidad quedó cumplida parcialmente, **y requirió al Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, para que acreditara haber realizado el pago de los salarios que dejó de percibir desde el momento en que fue separado de su cargo y hasta que se dé cumplimiento a la sentencia de nulidad**.

**SEXTO.** Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causas de improcedencia que hagan valer las partes o aquéllas que se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de garantías tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo, que prevé:

**Artículo 62.** Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 814, aplicada por analogía, de rubro y texto siguiente:

**IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.** Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.

(Registro: 394770, Octava Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, página 553)

Al no existir causa de improcedencia propuesta por las partes o que se adviertan de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación.

**SÉPTIMO.** No se transcriben los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, atento a lo dispuesto, por analogía, en la jurisprudencia, 2a./J. 58/2010, de rubro y datos de localización siguientes:

**CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.** (Registro: 164618, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXI, Mayo de 2010, página 830)





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

JUICIO DE  
AMPARO

P.1251/2018-

VIII

En ese sentido, el quejoso aduce que los actos reclamados violan en su perjuicio la garantía de justicia pronta y expedita, establecida en el artículo 17 de la Constitución Federal, en razón de que las autoridades responsables han omitido realizar las acciones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil catorce, en el juicio de nulidad II-34204/2014, modificada por la diversa sentencia dictada en el recurso de apelación 1374/2015 y 1543/2015 (ACUMULADOS), así como a la resolución de queja por incumplimiento de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis.

Ahora bien, de la relación de constancias que integran el juicio de nulidad II-34204/2014, relatadas en el considerando quinto que antecede, se advierte que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías que dio origen al juicio de amparo en que se actúa, la autoridad demandada y obligada al cumplimiento de la sentencia emitida por la Sala Superior, no ha acreditado haber pagado al quejoso las prestaciones a la que fue constreñida, ni tampoco la Segunda Sala responsable ha determinado una cantidad precisa y exacta a devolver para el debido cumplimiento al hoy peticionario de garantías.

En relación con lo expuesto, se considera **fundado** el concepto de violación a estudio, en virtud de que como lo aduce el quejoso, se viola en su perjuicio el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por violación al principio de: "Justicia Pronta y Expedita"; **y de oficio**, este Juzgado de Distrito, advierte vulnerados los artículos 1º y 133, de la Carta Magna y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), al restringirse el Derecho Humano de Acceso a la Justicia por parte de las autoridades responsables, bajo los elementos que la componen y que se referirán más adelante, atento a las siguientes consideraciones.

Sirve de apoyo a lo anterior, por mayoría de razón y aplicación analógica, la jurisprudencia IV.2o.A. J/7 (10a.), de rubro y texto siguiente:

**CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. ES UNA OBLIGACIÓN INELUDIBLE DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL EJERCERLO, AUN DE OFICIO, CUYO INCUMPLIMIENTO VULNERA EL MANDATO CONSTITUCIONAL DE PROTEGER Y GARANTIZAR LOS DERECHOS HUMANOS Y COMPROMETE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL DEL ESTADO MEXICANO EN SU CONJUNTO.** Los artículos 1o. y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen el deber de toda autoridad de proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Norma Suprema y en los tratados internacionales de los que el país es parte y, en cuanto a los Jueces, el deber de arreglarse a la Constitución a pesar de leyes o disposiciones en contrario, a partir de lo cual, se reconoce que a cargo de las autoridades jurisdiccionales obra la obligación de ejercer de oficio o a petición de parte, un control de convencionalidad en materia de derechos humanos, el cual deberá adecuarse al modelo de control de constitucionalidad existente en el ordenamiento interno, conforme a los parámetros delineados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXVII/2011 (9a.), P. LXVIII/2011 (9a.) y P. LXIX/2011 (9a.). Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido, en relación con el deber de los Estados firmantes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de respetar bienes jurídicos y libertades reconocidos en ella; **que la acción u omisión de cualquier autoridad pública, independientemente de su jerarquía, que implique un incumplimiento de ese deber, constituye un hecho imputable al Estado en su conjunto**, que compromete su responsabilidad en los términos previstos por la propia convención (caso Tribunal Constitucional vs. Perú. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Serie C, No. 71, y caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviembre de 2000. Serie C, No. 70). Asimismo, que la responsabilidad estatal puede surgir cuando un órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público afecte indebidamente, por acción u omisión, algunos de los bienes jurídicos protegidos por dicho instrumento internacional (caso Albán Cornejo y otros vs. Ecuador. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2007. Serie C, No. 171), y que cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como el mencionado, sus Jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a él, lo que les obliga a velar por que los efectos de

7



4 000258 150986



sus disposiciones no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, las cuales, desde un inicio, carecen de efectos jurídicos [caso Almonacid Arellano y otros vs. Chile. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C, No. 154, y caso Trabajadores Cesados del Congreso (Aguado Alfaro y otros) vs. Perú. Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2006. Serie C, No. 158]. Partiendo de lo anterior, como el Estado Mexicano firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aprobada por el Senado de la República el 18 de diciembre de 1980, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de mayo de 1981, y por virtud de su artículo 1, numeral 1, en términos de los mencionados artículos 10. y 133 constitucionales, obra a cargo de toda autoridad jurisdiccional nacional, con independencia de su fuero o jerarquía, la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en el referido pacto, así como el deber de garantizar su libre y pleno ejercicio a favor de toda persona sin distinción por motivo de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social, mientras que conforme a su artículo 33, los actos de esas autoridades, como partes del Estado Mexicano, están sometidos a la competencia tanto de la Comisión como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en lo relativo al cumplimiento de dicha obligación. **De ahí que el deber de ejercer, aun de oficio, el control de constitucionalidad y convencionalidad de los actos de que una autoridad tenga conocimiento en el ámbito de sus competencias y facultades, debe asumirse con puntualidad,** responsabilidad y eficacia, y no evadirse, menos aún en casos en que expresamente un gobernado solicita su ejercicio, pues soslayarlo refleja gravemente el incumplimiento de la primera obligación impuesta por el orden constitucional interno a todas las autoridades, que a su vez supone el respeto de todos los derechos reconocidos a las personas en la Constitución y en la Convención y dicho incumplimiento compromete la responsabilidad internacional del Estado Mexicano en su conjunto, acorde con el principio básico relativo, recogido en el derecho internacional de los derechos humanos, en el sentido de que todo Estado es internacionalmente responsable por actos u omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos en violación de los derechos internacionalmente consagrados.

(Registro: 2005056, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo II, página: 933)

Así como la tesis .3o.C.29 K (10a.), que dispone:

**ACCESO A LA JUSTICIA. ES OBLIGATORIO ANALIZAR OFICIOSAMENTE LA INFRACCIÓN A ESTE DERECHO HUMANO REGULADO POR EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.** La obligación de analizar oficiosamente la infracción a un derecho humano de acceso a la justicia se satisface y se justifica, cuando puede determinarse que la interpretación y aplicación de la ley al caso concreto son contrarias a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona. Esto es, aunque existe la autonomía e independencia de los Jueces en el ejercicio de su arbitrio judicial, queda claro que cuando se afecta un derecho humano como el de acceso a la justicia, la aplicación de la norma en la resolución judicial debe obedecer a un ejercicio de ponderación en el que exista la mayor aproximación a la finalidad de lograr la protección más amplia de la persona, y si esto no es así, en cualquier instancia de revisión, existe la razón para concluir que ha habido **una violación manifiesta de la ley que ha dejado sin defensa a la quejosa, y procederá suplir y analizar oficiosamente la cuestión procesal o de fondo.** Claro está que en materia jurídica la aplicación de la norma exige una serie de razonamientos para desestimarla o justificar su aplicación al caso concreto y que el arbitrio judicial parecería que justifica diversas soluciones; sin embargo, el nuevo principio constitucional de lograr la protección más amplia de la persona **permite justificar la búsqueda de la**





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

**solución que más se aproxima a tal objetivo**, pues es en ese ámbito donde necesariamente se inscribe el tema de la violación manifiesta de la ley.

(Registro: 2003809, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXI, Junio de 2013, Tomo 2, página: 1225)

Ahora bien, los artículos que se estiman vulnerados establecen lo siguiente:

## JUICIO DE AMPARO

P.1251/2018-

VIII

- **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**

**Art. 1o.** En los Estados Unidos Mexicanos **todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.**

**Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.**

**Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.**

[...]

**Art. 133.** Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los Tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. **Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.**

**Art. 17.**

[...]

**Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.**

**El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos.**

- **Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto De San José)**

**Artículo 25. Protección Judicial**

**1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.**

**2. Los Estados Partes se comprometen:**

a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso.

De los artículos 1º y 133 constitucionales se desprenden lo siguiente:



4 000238 150986



- Que en los Estados Unidos Mexicanos, **toda persona gozará de los Derechos Humanos reconocidos por la Constitución y en los Tratados Internacionales** en los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección.
- Que los **Derechos Humanos no pueden restringirse ni suspenderse**, salvo los casos y bajo las condiciones que establece la propia constitución, y que su interpretación será favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.
- Que todas las autoridades en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, **proteger y garantizar** los Derechos Humanos, bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
- Que la Constitución y los Tratados Internacionales que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que estén celebrados por el Presidente de la República con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema.
- Que los jueces de cada Estado se arreglarán a la Constitución y a los Tratados Internacionales, a pesar de disposiciones en contrario.

Por su parte, el artículo 17 constitucional, refiere el derecho toda persona a que se le administre justicia, destacándose del párrafo segundo los siguientes elementos:

**1) Justicia pronta.** Se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes;

**2) Justicia completa.** Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;

**3) Justicia imparcial.** Significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido.

**4) Justicia gratuita.** Estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

**5) Plena ejecución.** La cual versa en el sentido de que las resoluciones que constriñan a su acatamiento, tendrá que realizarse en la forma en que se haya fallado dentro de ella misma, es decir, deberá darse cumplimiento a lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en los términos y condiciones que se dijeron en la misma obligación a la que por regla general nadie puede eximirse alegando alguna circunstancia ajena a la litis.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de rubro y texto siguiente:

**ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.-** La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMAS-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
**TRÁMITE**

JUICIO DE  
AMPARO

P.1251/2018-

VIII

función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales.

(Registro: 921075, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Apéndice (actualización 2002), I, Jur. Acciones de Inconstitucionalidad y C.C., Página: 227)

Igualmente es de citarse, la tesis: I.7o.A.20 K que establece:

**SENTENCIAS. SU CUMPLIMIENTO ES INELUDIBLE.** De acuerdo al contenido del artículo 17 constitucional, es una garantía la plena ejecución de las resoluciones que dicten los tribunales; en razón de ello, quien queda constreñido al acatamiento de una sentencia no puede pretender eximirse de esa obligación alegando alguna circunstancia ajena a la litis.

(No. Registro: 193,495, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Agosto de 1999, Página: 799)

Por otro lado, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto San José), establece el derecho de toda persona a un recurso sencillo y rápido, o recurso efectivo, ante los jueces y tribunales competentes, así como la obligación de los Estados a garantizar el cumplimiento de toda decisión en el que el recurso se haya estimado procedente.

Así, de la interpretación armónica de los preceptos citados y de la confrontación de los antecedentes narrados del presente juicio, se advierte que si bien es cierto el Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, no ha dado debido y puntual cumplimiento a la sentencia dictada el tres de diciembre de dos mil catorce, en el juicio de nulidad II-34204/2014, modificada por la diversa sentencia dictada en el recurso de apelación 1374/2015 y 1543/2015 (ACUMULADOS), así como a la resolución de queja por incumplimiento de veintidós de noviembre de dos mil dieciséis, también lo es que, **no se encuentra determinada cantidad exacta a devolver por parte de la Segunda Sala responsable.**

La omisión anterior, incide directamente en el incumplimiento y retardo en la ejecución de la sentencia que ahora se duele el quejoso, pues la autoridad demandada en el juicio de nulidad, se encuentra impedida a realizar el pago de cantidad alguna, si ésta aún no se encuentra determinada, o conciliada por las partes en el juicio natural, lo cual únicamente corresponde a la Segunda Sala responsable, pues son actos preparatorios de la ejecución de su sentencia en el que constriñó a las autoridades demandadas al pago de diversas prestaciones, por lo que se viola en perjuicio del quejoso, los principios de "justicia pronta y expedita" protegido por el artículo 17 constitucional, y "Recurso Efectivo" reconocido en el artículo 25 de la Convención citada, éste último, en lo relativo al derecho de toda persona, a contar con un recurso sencillo y rápido, y la correlativa obligación del Estado a través de las autoridades que lo representan a garantizar su cumplimiento.

Esto se estima de esta forma, pues la garantía de acceso a la administración e impartición de justicia se haría nugatoria si las resoluciones definitivas no fueran acatadas tampoco de manera pronta, expedita y completa, por quien se encuentran obligado a ello, por tanto, el objeto de la función jurisdiccional carecería de sentido alguno, el cual consiste, precisamente, en resolver las controversias entre los particulares o entre éstos y los órganos públicos y más cuando quien obtiene resolución favorable a sus intereses, no puede obtener el cumplimiento de la misma por omisión o retardo ya sea por parte de la autoridad jurisdiccional o de la parte obligada a ello.

Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia I.4o.A. J/103 (9a.), de rubro y texto siguiente:

**ACCESO A LA JUSTICIA. LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN EVITAR, EN TODO MOMENTO, PRÁCTICAS QUE TIENDAN A DENEGAR O LIMITAR ESE DERECHO.** A fin de satisfacer efectivamente el derecho





*fundamental de acceso a la justicia, debe acudir al artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el cual prescribe la obligación por parte del Estado, de conceder a toda persona bajo su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de derechos, los cuales pueden estar reconocidos tanto en la legislación interna, como en la propia convención. Asimismo, en la interpretación que se ha hecho de este numeral por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha sido criterio sostenido que, para la satisfacción de dicha prerrogativa, no basta con la existencia formal de un recurso, sino que éste debe ser efectivo; es decir, capaz de producir resultados o respuestas y tener plena eficacia restitutoria ante la violación de derechos alegada; en otras palabras, la obligación a cargo del Estado no se agota con la existencia legal de un recurso, pues éste debe ser idóneo para impugnar la violación y brindar la posibilidad real, no ilusoria, de interponer un recurso sencillo y rápido que permita alcanzar, en su caso, la protección judicial requerida. En estas condiciones, la existencia de esta garantía constituye uno de los pilares básicos, no sólo de la Convención Americana citada, sino de todo Estado de derecho. Por tanto, los órganos jurisdiccionales deben evitar, en todo momento, prácticas que tiendan a denegar o limitar el referido derecho de acceso a la justicia.*

(Registro: 159900, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, página: 1053)

En este sentido, es pertinente establecer que la omisión en que ha incurrido la Sala responsable consiste en **no hacer uso de todos los medios materiales y humanos que tenga a su alcance para hacer cumplir sus sentencias, incluso instaurar procedimientos de determinación de cantidades dentro de la etapa de ejecución de sentencia**, para dilucidar la forma y los alcances en que deben cumplir las autoridades demandadas con la sentencia ejecutoriada, determinando la cantidad líquida a devolver ya que la sentencia implica devolución de cantidades, pues esta cuestión incidirá en un rápido y exacto cumplimiento, evitando pérdida de tiempo en perjuicio de la impartición de justicia.

Lo anterior, pues resultaría absurdo determinar un incumplimiento de sentencia cuando en tratándose de devolución de cantidades, éstas no se han determinado por parte del tribunal natural, lo que evidentemente va en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita y recurso efectivo, en detrimento de los justiciables en su derecho humano a la protección judicial y la correlativa obligación de la Sala responsable a velar por su cumplimiento.

Sin que sea óbice que la Sala responsable pudiera alegar no contar con medios para determinar un exacto cumplimiento para la sentencia natural, toda vez que atendiendo a lo establecido en los artículos 1º, 17 y 133 de la Constitución General de la República y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, los Tribunales del Fuero Común y Federal, sin importar materia y/o jurisdicción, así como toda autoridad en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y Tratados Internacionales suscritos por México, como lo son, los principios de "justicia pronta y expedita" protegido por el artículo 17 constitucional, y "recurso efectivo" reconocido en el artículo 25 de la Convención citada, éste último, en lo relativo al derecho de toda persona, a contar con un recurso sencillo y rápido, y la correlativa obligación del Estado a través de las autoridades que lo representan a garantizar su cumplimiento, de ahí que es inatendible un impedimento de esta naturaleza, pues toda autoridad jurisdiccional, **debe hacer uso de todos los medios materiales y humanos para hacer cumplir sus sentencias, incluso, instaurar procedimientos dentro de la etapa de ejecución, para cuantificar y dilucidar el exacto cumplimiento de la sentencia natural.**

Lo anterior se estima de esta forma, ya que la propia Constitución y Tratados Internacionales suscritos por México, en el que se reconoce como Derecho Humano el Acceso a la Justicia de manera pronta, completa e imparcial, sientan las bases y permean cualquier restricción, incluso legales, pues debe atenderse a una interpretación amplia y conforme a la Constitución Federal y Tratados Internacionales suscritos por México, cumpliendo de esta manera con el artículo 1º de la Carta Magna, acorde a los nuevos paradigmas de protección judicial, por ello, de no existir elementos necesarios, deben instaurarse para cumplir con las máximas de "justicia pronta y expedita" y





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

"recurso efectivo", máxime que al ser el tribunal en el que nace la acción, es a quien corresponde velar y coadyuvar por el exacto cumplimiento de sus sentencias.

Sirve de apoyo, por el contenido que informa, la jurisprudencia VI.10.A. J/2 (10a.), que prevé:

**ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. LAS GARANTÍAS Y MECANISMOS CONTENIDOS EN LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1 Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS, TENDENTES A HACER EFECTIVA SU PROTECCIÓN, SUBYACEN EN EL DERECHO FUNDAMENTAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.** El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado de manera sistemática con el artículo 10. de la Ley Fundamental, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ha sostenido jurisprudencialmente la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007 de su índice, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". Sin embargo, dicho derecho fundamental previsto como el género de acceso a la impartición de justicia, se encuentra detallado a su vez por diversas especies de garantías o mecanismos tendentes a hacer efectiva su protección, cuya fuente se encuentra en el derecho internacional, y que consisten en las garantías judiciales y de protección efectiva previstas respectivamente en los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación. Las garantías mencionadas subyacen en el derecho fundamental de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 constitucional, y detallan sus alcances en cuanto establecen lo siguiente: 1. El derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter; 2. **La existencia de un recurso judicial efectivo contra actos que violen derechos fundamentales;** 3. El requisito de que sea la autoridad competente prevista por el respectivo sistema legal quien decida sobre los derechos de toda persona que lo interponga; 4. El desarrollo de las posibilidades de recurso judicial; y, 5. **El cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. Por tanto, atento al nuevo paradigma del orden jurídico nacional surgido a virtud de las reformas que en materia de derechos humanos se realizaron a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, se estima que el artículo 17 constitucional establece como género el derecho fundamental de acceso a la justicia con los principios que se derivan de ese propio precepto (justicia pronta, completa, imparcial y gratuita), mientras que los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos prevén garantías o mecanismos que como especies de aquél subyacen en el precepto constitucional citado, de tal manera que no constituyen cuestiones distintas o accesorias a esa prerrogativa fundamental, sino que tienden más bien a especificar y a hacer efectivo el derecho mencionado, debiendo**

JUICIO DE  
AMPARO

P.1251/2018-

VIII





interpretarse la totalidad de dichos preceptos de modo sistemático, a fin de hacer valer para los gobernados, atento al principio pro homine o pro personae, la interpretación más favorable que les permita el más amplio acceso a la impartición de justicia.

(Registro: 2001213, Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 2, página: 1096)

Sirve de apoyo por su aplicación analógica, la jurisprudencia siguiente:

**SENTENCIAS DE AMPARO. PARA LOGRAR SU EFICAZ CUMPLIMIENTO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA PRECISAR SU ALCANCE, SEÑALAR LAS AUTORIDADES VINCULADAS A CUMPLIRLAS Y LA MEDIDA EN QUE CADA UNA DE ELLAS DEBE PARTICIPAR.**

El artículo 17, penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, dispone que "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones."; por su parte, los artículos 104 al 113 de la Ley de Amparo, establecen diversos procedimientos tendientes a obtener el cumplimiento eficaz de las sentencias que conceden el amparo e, inclusive, el último de estos preceptos dispone que no podrá archivarse ningún expediente sin que esté enteramente cumplida la sentencia de amparo. La interpretación congruente de tales disposiciones constituye el sustento en que se apoya toda determinación encaminada a conseguir el cumplimiento pleno de las resoluciones jurisdiccionales, máxime si lo que se pretende es ejecutar un fallo emitido por los tribunales de la Federación en un juicio de amparo, ya que éste tiene por objeto, precisamente, tutelar a los gobernados contra los actos de autoridad que infrinjan sus garantías individuales. De esto se sigue que si la causa del retardo para la ejecución de la sentencia de amparo consiste en la confusión respecto de la manera correcta en la que procede cumplimentarla, para estar en posibilidad de dar solución a la situación descrita, la Suprema Corte tiene facultades para establecer los alcances del fallo protector, determinar qué autoridades se encuentran vinculadas a cumplirlo y en qué medida, con el objeto de conseguir el eficaz y pleno cumplimiento de la sentencia de amparo.

(Registro: 195,909, Novena Época, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, Julio de 1998, página: 146)

Y que en este sentido, el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, también regule en su artículo 88, el trámite de incidentes, cualquiera que sea la naturaleza, en el que se dictará resolución correspondiente.

- **Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal.**

**ARTÍCULO 88.** Los incidentes se tramitarán, cualquiera que sea su naturaleza, con un escrito de cada parte, y tres días para resolver. Si se promueve prueba, deberá ofrecerse en los escritos respectivos, fijando los puntos sobre los que verse. Si las pruebas no tienen relación con los puntos cuestionados incidentalmente, o si éstos son puramente de derecho, el tribunal deberá desecharlas. En caso de admitirlas se citará para audiencia dentro del término de diez días, diferible por una sola vez, en que se reciban pruebas, se oigan brevemente las alegaciones, y se cite para sentencia interlocutoria.

En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sala Ordinaria del hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, atendiendo a la naturaleza del cumplimiento, aperture el correspondiente incidente de cuantificación de cantidades, para determinar la cantidad líquida que corresponde pagar al actor, hoy quejoso, toda vez que como se dijo, el pago de los mismos representa parte del cumplimiento de su resolución, y una vez determinados, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento.





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

JUICIO DE  
AMPARO

P.1251/2018-  
VIII

Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez determinada la cantidad referida en el párrafo que antecede, el **Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México**, pague en un término que no exceda de **diez días**, a partir de que sea notificadas de la cantidad que la Segunda Sala citada determine, con lo cual quedará **cumplida** la presente sentencia.

Es aplicable, por su contenido substancial, la jurisprudencia número P./J. 113/2001 que establece:

**JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL.**

De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da.

(Registro: 188,804, Materia(s): Constitucional, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIV, Septiembre de 2001, página: 5)

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se

**RESUELVE**

**PRIMERO.** Se sobresee en el presente juicio de amparo, en contra del acto reclamado al **Contralor Interno**, a la **Alcaldesa**, ambos de la **Alcaldía en Tlalpan** y al **Director de Situación Patrimonial de la Secretaría de la Contraloría General** (antes Contraloría General), todos de la **Ciudad de México**, por las razones expuestas en el considerando **tercero** de la presente sentencia.

**SEGUNDO.** La Justicia de la Unión ampara y protege a [REDACTED] por propio derecho, en contra de los actos reclamados a la **Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa** y al **Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México**, por los motivos y para los efectos expuestos en el **último** considerando de este fallo.

**Notifíquese.**

Así lo resolvió y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el/la Secretaria/o Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe. **Doy fe.**

El Juez

Francisco Javier Rebolledo Peña





La Secretaria

Diana Laura Mireles Ramírez

FJRP/DLMR"

Lo que comunico a Usted para su conocimiento.  
Ciudad de México, a nueve de mayo de dos mil diecinueve.

La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la  
Ciudad de México



Lic. Diana Laura Mireles Ramírez

JUZGADO SEXTO DE  
DISTRITO EN MATERIA  
ADMINISTRATIVA  
EN LA CIUDAD DE MÉXICO





DER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

T-5825 FORMAB-1

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"  
TRÁMITE

JUZGADO SEXTO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA EN LA CIUDAD DE MÉXICO

JUICIO DE  
AMPARO

1251/2018-VIII

- OF.48621/2019 MAGISTRADO PRESIDENTE DEL DECIMONOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. (REFERENCIA: R.A. 289/2019).
- 48622/2019 SEGUNDA SALA ORDINARIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE LA CIUDAD DE MÉXICO (REFERENCIA: JUICIO DE NULIDAD II-34204/2014).
- 48623/2019 DIRECTOR DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA AGENCIA DE GESTIÓN URBANA ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 48624/2019 CONTRALORÍA INTERNA EN LA ALCALDÍA DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 48625/2019 ALCALDE DE TLALPAN EN LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 48626/2019 DIRECTOR DE SITUACIÓN PATRIMONIAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO (AUTORIDAD RESPONSABLE)
- 48627/2019 AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO (MINISTERIO PÚBLICO)

En los autos del juicio de amparo 1251/2018-VIII, promovido por [REDACTED] contra actos de Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y otra autoridad se dictó un acuerdo que a la letra dice:

"Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual, devuelve los autos originales del juicio de amparo número 1251/2018-VIII, promovido por [REDACTED] por propio derecho, contra actos del Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana adscrita a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México y otras autoridades, y al efecto remite copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada en el recurso de revisión número R.A. 289/2019.

Se hace del conocimiento de las partes que el citado órgano colegiado resolvió lo siguiente:

"PRIMERO. En la materia de la revisión se confirma la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Luis Aburto Orozco, en los términos y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida."

Acúsesse el recibo de estilo correspondiente, y previo al presente proveído, glósense las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la remisión de los presentes autos, para la sustanciación de la alzada en el estado que actualmente se encuentre.

Precisado lo anterior, conviene señalar que los efectos del fallo amparador consisten en lo siguiente (foja 162 vuelta):

"En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable Segunda Sala Ordinaria del hoy Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, dentro de los diez días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, atendiendo a la naturaleza del cumplimiento, aperture el correspondiente incidente de cuantificación de cantidades, para determinar la cantidad líquida que corresponde pagar al actor, hoy quejoso, toda vez que como se dijo, el pago de los mismos representa parte del cumplimiento de su resolución, y una vez determinados, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento.

Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez determinada la cantidad referida en el párrafo que antecede, el Director de Asuntos Jurídicos de la Agencia de Gestión Urbana de la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México, pague en un término que no exceda de diez días, a partir de que sea notificadas de la cantidad que la Segunda Sala citada determine, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia."

En esas condiciones, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del cual las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir



986051 352000 4  
000238 150986



en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente:

Los artículos 192, 193, 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén:

**“Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas.** Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.

**Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo.**

Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo.

En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo...

**Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma.**

**La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.**

**Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.**

**Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo.”** (Lo destacado es propio).

Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la ley invocada, que prevén:

**“Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada.** Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan





PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

*"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata"*  
**TRÁMITE**

en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.

Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día."

**"Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días."** Lo subrayado es propio).

**JUICIO DE  
AMPARO**

**1251/2018-VIII**

Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo.

Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal.

Por ende, y toda vez que para colmar el segundo y tercero de los efectos referidos, se debe colmar el primero de ellos, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, se requiere a la **Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México**, para que dentro del plazo de **diez días**, contado a partir del momento en que quede legalmente notificado del presente proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo.

**En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se les impondrá a las personas físicas que ocupen los cargo de Magistrados integrantes de la Sala referida, una multa por cien veces la medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y con base en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis.**

Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del **DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL**.

**Notifíquese.**

Así lo proveyó y firma, el licenciado **Francisco Javier Rebolledo Peña**, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria **Diana Laura Mireles Ramírez**, quien autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

El Juez

Francisco Javier Rebolledo Peña

La Secretaria

Diana Laura Mireles Ramírez

*Asps"*

Lo que comunico a Usted para su conocimiento.  
Ciudad de México, a veintiocho de octubre de dos mil diecinueve.

**La Secretaria del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México**

Lic. Diana Laura Mireles Ramírez

